



Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022)

**REFERENCIA**

**EXPEDIENTE No.:** 11001-33-35-010-2022-00271-00  
**ACCIONANTE:** JOHN JAIRO PEREZ MORENO y LADY YURLAY CARVAJAL GONZÁLEZ en representación de sus hijos menores IPC y GPC.  
**ACCIONADA:** NACION - FISCALIA 33 LOCAL DE BOGOTÁ  
**CLASE:** ACCIÓN DE TUTELA

Procede el Despacho a decidir sobre la admisión de la acción de tutela de la referencia.

Por intermedio de apoderado, los accionantes **JHON JAIRO PEREZ MORENO y LADY YURLAY CARVAJAL GONZALEZ** identificados con cédula de ciudadanía 80.146.046 y 1.012.386.505 respectivamente, interponen la presente acción constitucional en contra de la entidad **FISCALIA 33 LOCAL DE BOGOTÁ**, en procura de la protección de los derechos fundamentales a la prevalencia de los derechos de los niños, debido proceso, derecho a familia y no ser separado de ella.

Frente a lo expuesto, es importante establecer que, sobre la competencia para conocer de las acciones de tutela, el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la misma, en el artículo 37 señala que son competentes a prevención, todos los jueces o tribunales del territorio nacional donde hubiese ocurrido la violación o amenaza que motiva la presentación de la solicitud.

De otra parte, el Decreto 333 del 06 de abril de 2021, *"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"*, dispone lo siguiente:

*"Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:*

*"Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:*  
*(...)*

***4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen. Para el caso de los Fiscales que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera instancia y a prevención, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial."***

Para el caso concreto, se vislumbra que la acción se dirige en concreto contra la



Fiscalía 33 Local de Bogotá. Revisados lo pretendido en la tutela, se observa que los accionantes pretenden que la entidad accionada, en primera medida suspenda las diligencias que deben practicarse dentro del proceso con número de radicado 110016000012202156078 y además se dé trámite al principio de oportunidad elevado al interior de dicho expediente.

De este modo, se observa que el medio constitucional se interpuso en virtud de las actuaciones de una fiscalía, por consiguiente esta Agencia Judicial considera que no es competente para conocer la presente acción de amparo, habida cuenta que acorde a lo dispuesto en la norma transcrita, dada la autoridad contra quien se dirige la acción, la competencia para resolver la tutela recae en los juzgados penales del Circuito, superior funcional de los jueces penales municipales. En este caso los juzgados Penales del Circuito de Bogotá, dado que del domicilio de las partes es dable inferir que la ocurrencia de la violación o amenaza que motiva la presentación de la solicitud es en la ciudad de Bogotá.

El Juzgado reconoce que la Corte Constitucional ha precisado que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y demás normas de carácter reglamentario, en modo alguno constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. No obstante, en el Auto 216 de 2019 (MP. Diana Fajardo Rivera) la misma Corporación aclaró de manera reiterada que las consideraciones expuestas no impiden que la autoridad judicial que conozca un conflicto de competencia aparente, suscitado con base en reglas de reparto, devuelva el expediente al despacho al que le corresponda su conocimiento en virtud de tales reglas, así se modifique la asignación inicial, si se encuentra que se ha realizado un reparto caprichoso<sup>1</sup>. Este ocurre cuando existe una “*manipulación grosera*”<sup>2</sup> de las reglas de reparto, que se presenta, por ejemplo, en el caso de una “*distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes*”<sup>3</sup>; o en aquel “*en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído*”<sup>4</sup>

Dado que en este caso no se observó la regla de reparto respectiva que asigna el conocimiento de la acción de tutela a los Juzgados Penales del Circuito, por estar dirigida contra una autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales, es menester remitir el expediente a dichos juzgados para que resuelvan sobre la admisión de la acción de tutela.

<sup>1</sup> Se aclara que los pies de página 1, 2 y 3 corresponden al Auto 216 de 2019, emanado de la Corte Constitucional. “Esta posición fue establecida por la Corte en el auto 124 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa ocasión, esa Corporación consideró que, si bien no es posible promover conflictos de competencia con base en las reglas de reparto, esto no lleva a desconocer su validez. Por consiguiente, “*deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario*”. Esta postura ha sido reiterada en el auto 198 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), que ha sido tenido en cuenta de manera continua por la Corte en los pronunciamientos subsiguientes y, más recientemente, en los siguientes autos: 365 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 378 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 525 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; 588 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; y 293 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<sup>2</sup> Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

<sup>3</sup> Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

<sup>4</sup> Auto 198 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. La Corte, incluso, ha llegado a sostener, en el auto 073 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), por ejemplo, que “*no es acertado que una autoridad par o de inferior categoría resuelva el amparo que se presenta contra por ejemplo un alto tribunal*”. Esta providencia se reitera en el auto 372 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).”



En virtud de lo expuesto, el Despacho

**RESUELVE:**

**PRIMERO: ABSTENERSE** de conocer la presente acción de tutela por carecer de competencia.

**SEGUNDO: REMITIR** la presente acción constitucional a los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá – reparto - a través de la correspondiente oficina de apoyo judicial, conforme a lo expresado en precedencia.

**TERCERO:** En caso de que los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá no asuman la competencia para conocer de la acción de tutela, **PROPONER CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ANTE LA H. CORTE CONSTITUCIONAL** para que resuelva lo pertinente.

**CUARTO: NOTIFICAR** la presente decisión a los accionantes.

**QUINTO:** Por secretaría, dejar las constancias respectivas y dar cumplimiento a lo aquí ordenado.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**AUGUSTO LLANOS RUIZ**  
**JUEZ**